

Luis MARTÍNEZ GARCÍA, *Entre la utopía y la realidad: las deficiencias de un sistema de archivos perfecto*, «SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita» 5 (1998) Universidad de Alcalá, pp. 35-52.

ENTRE LA UTOPIA Y LA REALIDAD: LAS DEFICIENCIAS DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS PERFECTO

LUIS MARTÍNEZ GARCÍA
ARCHIVO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA

“Hay en la isla cincuenta y cuatro ciudades, todas las cuales tienen en común el idioma, las instituciones y las leyes; y puede decirse que todas ellas están construidas bajo un mismo modelo ...”
(Tomás Moro: *Utopía*)

INTRODUCCIÓN

El Sistema Español de Archivos recoge, sistematiza y desarrolla normativamente los archivos de las instituciones, los órganos directivos, los centros técnicos docentes y el personal especializado. Sus objetivos son muy claros: elaborar una legislación específica común; estructurar y coordinar a todos los órganos administrativos; conseguir archiveros profesionales con conocimientos comunes; normalizar las transferencias protegiendo a la documentación desde su creación en las oficinas hasta su depósito definitivo en un archivo histórico; y custodiar el patrimonio documental como fórmula para garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, como fuente de información para la gestión de la Administración y como testimonio de la memoria e identidad cultural de la nación.

El sistema se compone de dieciocho subsistemas: el Estatal y las diecisiete comunidades autónomas. Aunque coordinados entre sí, son independientes los unos de los otros en razón de la desconcentración y descentralización de las Administra-

ciones Públicas, por la capacidad jurídica plena de las Comunidades Autónomas y en virtud de los principios que emanan del equilibrio constitucional.¹

Este corpus jurídico y técnico es fruto de la labor y trabajo de los órganos ejecutivos y técnicos de las Administraciones Públicas y de las aportaciones de profesionales de los archivos, que en varios trabajos, artículos, jornadas, conferencias y congresos han intentado estructurarlo.² Racionalizar los archivos en unos momentos de convulsiones que han afectado a nuestro sistema político y legal, en una situación de crisis y renovación de los postulados archivísticos y en medio de una profesión, cada vez más abierta, que se debate en una soterrada polémica sobre cuáles son sus objetivos y cuáles deben ser los principios técnicos sobre los que se asienta su labor, es difícil, si no imposible. En torno a la posesión, uso y disfrute de los documentos se ha creado un conjunto de intereses personales y colectivos, más o menos espurios, que impiden el cauce fluido del

¹ Existen una serie de leyes coordinadoras de obligado cumplimiento, cuyos principios deben ser aplicados y desarrollados por la legislación del Estado y las Comunidades: Constitución de 1.978; Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 111/1986, de 10 de diciembre, que desarrolla la ley anterior; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y Ley 5/1992, de 20 de agosto, de protección de los datos automatizados en poder de las Administraciones Públicas.

² Son muy numerosas estas actuaciones, y con el riesgo de olvidarnos de algunos profesionales, debemos destacar los Congresos IV y VI de ANABAD celebrados en La Coruña y Murcia respectivamente; el 1º y 2º Congresos de Archivos de Castilla y León celebrados en Zamora y Palencia; las Iª Jornadas de Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación e Museos de Galicia organizadas por ANABAD-Galicia en 1987 o Les Primeres Jornades d'Arxivística de Catalunya del mismo año. Entre las aportaciones de los profesionales destaquemos: José Manuel MATA CASTILLÓN, *Les archives espagnols dans le process d'autonomie*, «La Gazette des Archives» 121-122, pp. 151-160; Id. *Definición de funciones y planificación de los servicios técnicos en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico*, «Boletín de la ANABAD» XXXV, nº 2-3 (1985) pp. 177-178; Ibid. *El impacto de la descentralización sobre la política archivística*, «Archivum» XXXII (1986) pp. 68-74; Pedro LÓPEZ GÓMEZ, *El Sistema archivístico español anterior a la Constitución Española de 1978*, «Boletín de la ANABAD» XXXVIII, nº 1-2 (1988, enero-junio) pp. 149-172; Id. *Archivo Xeral da Administración de Galicia. Proposta para súa creación no contexto do sistema de arquivos da Comunidade Autónoma de Galicia*, Xunta de Galicia, 1990, pp. 20-36; Mª Jesús ÁLVAREZ COCA GONZÁLEZ, y Eduardo GÓMEZ-LLERA GARCÍA NAVA, *Redes y sistemas de archivos: legislación, órganos, centros y recursos*, «Boletín de la ANABAD» XXXVIII, nº 1-2 (1988, enero-junio) pp. 9-80; Eduardo GÓMEZ-LLERA GARCÍA NAVA, *Los reglamentos de archivos*, «Tabula» 1 (1992) pp. 65-274; Josep Mª SANS I TRAVÉ y Francesc BALADA I BOSCH, *Competencias de la Administración y las Administraciones Autonómicas en materia de archivos*, «Tabula» 1 (1992) pp. 17-64; Ángel SÁNCHEZ BLANCO, *El sistema de archivos: de las referencias culturales a las bases de las Administraciones Públicas*, «Cívitas. Revista Española de Derecho Administrativo» (1990) pp. 359-388; Margarita VÁZQUEZ DE PARGA Y GUTIÉRREZ DEL ARROYO, *El Sistema Archivístico Español*, «Lligal» 1 (1988) pp. 11-23; Luis MARTÍNEZ GARCÍA, *Archival Legislation 1981-1994 [voz España]*, «Archivum» XLI (1995) pp. 159-170.

trasiego documental desde las oficinas productoras hasta los archivos correspondientes.

Todos somos copartícipes de estos acontecimientos: las Administraciones Públicas, los archiveros y los ciudadanos; cada grupo refleja actitudes específicas y predeterminadas que dañan y deterioran el Sistema. La escasa incidencia de los archivos en España sólo puede entenderse dentro del proceso de «aculturación» que estamos sufriendo, de la progresiva falta de identidad de nuestra sociedad, del escaso interés que despierta entre nosotros el conocimiento de lo que fuimos y de lo que somos, de la implantación de otros modelos culturales en nuestra vida. Los medios de comunicación reflejan ese escaso interés, roto cuando los archivos se convierten en “moneda de cambio” o cuando sirven a las conveniencias de la política.

Las líneas que a continuación siguen quieren “alertar”, en clave de humor, de cuál es la realidad al margen de la teoría archivística, fuera de los parámetros de lo políticamente correcto y de los postulados de la propaganda oficial o de la utopía profesional. Debemos plantearnos si estas reflexiones son meras exageraciones o, por contra, muestran una realidad demasiado extendida. De todas formas, quede a salvo cualquier susceptibilidad personal; los comentarios incluidos en este texto no aluden a situaciones individuales sino a comportamientos generales, a los cuales el mismo autor no es ajeno ni se encuentra exento de responsabilidad.

LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS

Si el Sistema Estatal de Archivos es, en la teoría, una estructura impecable en sus conceptos e instrumentos, la realidad nos indica la existencia de vicios ocultos, y no tan escondidos, que hacen “rechinar” las piezas de tan magnífica maquinaria.

Un primer indicio de que los objetivos no se cumplen, como debieran, es la propia existencia de los archivos dentro del Ministerio de Cultura.³ Un Departamento que, difícilmente, puede actuar con una idea clara y concisa de las posibilidades para la información, gestión y racionalización administrativa que poseen los archivos. Tan cierta es esta premisa que, incluso, el nuevo Real Decreto que estructura al Ministerio de Cultura apenas incide en los archivos, salvo en un triste apartado, en donde una desafortunada redacción nos da a entender que el legislador no sólo apenas sabe qué hacer con semejantes instituciones, sino que su

³ En el momento de redactar estas líneas todavía no se había unificado con Educación.

estructuración en la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas difumina importantes competencias en materia de Patrimonio Documental.⁴ De esta manera, las funciones desarrolladas por los profesionales quedan “encorsetadas” en un entramado en el que las actividades culturales de los archivos palidecen ante las posibilidades de otras instituciones, como museos y bibliotecas, cuyas circunstancias estéticas y de público son completamente diferentes. Los loables intentos de equipararse a estos centros con exposiciones, gabinetes pedagógicos y difusión de los documentos especiales, como los planos y las fotografías, sólo pueden entenderse por la marginación sufrida por los archivos dentro de ministerios y consejerías de cultura que los sostienen, pero apenas los entienden.

El primer “zarpazo” legislativo que afecta al sistema archivístico es la Ley 30/1984, de 20 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. La Ley, por sí misma, era necesaria para coordinar, normalizar y controlar el desbarajuste en que se había convertido el funcionariado español, con la existencia de innumerables cuerpos específicos de cada una de las administraciones y organismos públicos. Se intentó dotar al Estado de un Cuerpo General de Funcionarios, coexistiendo con cuerpos específicos creados para la ejecución de misiones de singular carácter técnico; de esta manera se pensó evitar disfunciones administrativas y limitar corporativismos excluyentes. Pero para los archiveros supuso la pérdida de los archivos centrales de los organismos públicos. Los Cuerpos de Facultativos y Ayudantes de Archivos y Bibliotecas habían accedido, tradicionalmente, a esas plazas, y si la pérdida no fue absoluta (puesto que, hoy en día, siguen ocupando numerosos puestos), sí es cierto que en las relaciones de puestos de trabajo de los Ministerios, el no pertenecer al único cuerpo especialista de la Administración en archivos no es óbice para ocupar una plaza de esas características. Si a esto le añadimos que la misma Administración tiene problemas para distinguir a los archiveros de los bibliotecarios a pesar de realizar oposiciones distintas, o que los puestos de los archivos centrales indistintamente se cubren por personal de los grupos A o B, nos encontramos con que uno de los principios sobre los que se asienta el sistema, el de un personal especializado para todos los archivos, no se cumple. No se trata de una defensa corporativista de una profesión, sino de exigir que todo el personal posea los conocimientos necesarios e iguales para la gestión de los archivos públicos. ¿Acaso podemos imaginar un gabinete

⁴ La última reestructuración del Ministerio cita como única competencia los archivos adscritos, y desaparecen las derivadas de la gestión y protección del Patrimonio Documental y de normalización metodológica. La última reestructuración con Educación ha agravado el problema, pues hasta los Archivos Históricos Provinciales, centros de titularidad estatal gestionados por las Comunidades Autónomas, han desaparecido. Más divertido es que no se haga ninguna mención a Chancillería de Valladolid, ni a los provinciales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, cuya gestión directa todavía depende del Ministerio. Supongo que pueden entrar dentro del concepto de entidades “en el limbo”.

médico dirigido por un curandero milagroso, o un puente construido bajo la dirección de un habilidoso aficionado a los mecanos? ¿Dónde queda el principio de eficacia en la ejecución de los actos administrativos?

La difícil posición del Ministerio de Cultura y su “presunta” incapacidad legal para controlar el sistema, han contribuido a la aparición de administraciones privilegiadas en la gestión de sus archivos: algunas de ellas, como la universitaria,⁵ con una base legal firme basada en el principio de autonomía; otras como los organismos autónomos, las sociedades estatales o las empresas mixtas, por la mera fuerza de los hechos. Pero en todos estos casos no existe una norma común, pues algunos transfieren a los archivos del Ministerio de Cultura, otros crean sus propios centros históricos y algunos, simplemente, hacen desaparecer la documentación por arte de “birle-birloque”.⁶

El confusionismo legal está tan arraigado que, incluso el Estado y las Comunidades Autónomas realizan convenios en situación de paridad con colegios profesionales, como los de arquitectos y notarios, para que depositen en los archivos públicos la documentación que es consecuencia de una delegación de funciones de la Administración Pública.⁷

Mayor comentario merece la dicotomía administración civil y administración militar. Esta separación es fruto de las vicisitudes políticas españolas de los siglos XIX y XX, durante los cuales el estamento militar se transforma en un “grupo de presión” dentro de la vida pública española. Los archivos son el reflejo de esta situación, con la existencia de un sistema dentro del sistema. Su compleji-

⁵ En la ley de Autonomía Universitaria se excluye expresamente cualquier competencia de las Universidades sobre el Patrimonio Cultural. Esta disposición debería obligar a todas ellas, como Entidades Especiales con Autonomía Real, a seguir los dictados que en materia cultural regule el Ministerio de Educación y Cultura.

⁶ La variedad es desgraciadamente muy diversa. Como ejemplos de empresas que han transferido su documentación a un archivo intermedio valgan las incluidas en el cuadro de clasificación de fondos del Archivo General de la Administración, en *Archivo General de la Administración 1969-1994*. Subdirección General de los Archivos Estatales, 1995. Como ejemplo de empresa pública que ha constituido su propio archivo histórico: el de Tabacalera en Sevilla.

⁷ Incluso el propio Ministerio de Cultura firmó un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para transferir al Archivo General de la Administración. La Comunidad Autónoma de Galicia, por su parte, firmó un curiosísimo convenio con el Colegio de Notarios de Galicia, en el que se realiza un reparto de los protocolos, que uno quiere pensar que intenta ser salomónico: obviando la normativa del Estado y marginando al Ministerio de Justicia, se remiten los protocolos notariales de Lugo, Orense y Pontevedra a los correspondientes Archivos Histórico-Provinciales, y los de La Coruña se reparten entre un fantasmagórico Archivo Distrital de Protocolos y el Universitario de Santiago.

dad de centros e instituciones por ejército (tierra, armada y aire) y su peculiar fórmula de organización archivística ha motivado la aparición, en el Ministerio de Defensa, de un órgano encargado de coordinar los archivos; al cual se le supone un valor y moral legionario.⁸

Si el Ejército y la Administración Institucional escapan de un control exhaustivo, más difícil de explicar resulta la situación de organismos de la Administración que carecen de archivo. Si su ausencia en la administración periférica es casi la norma habitual (excepto en Hacienda, pues con el dinero nunca se ha jugado), su inexistencia en Ministerios como el de Sanidad y Asuntos Sociales indican una especial forma de entender cómo se debe proteger el Patrimonio Histórico Documental.⁹

Porque el Ministerio de Cultura sólo tiene un instrumento eficaz, una única arma legal para coordinar el sistema: la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Al dar carácter de patrimonio documental a los documentos de la Administración Pública desde el mismo momento que se generan, obliga a las instituciones públicas a sujetarse a la legislación relativa a las transferencias, única posibilidad de protegerlos de la destrucción u ocultamiento. Sin embargo, la citada ley sufre transgresiones de otras normas legales que la ignoran o arbitrariamente la mal interpretan. Un ejemplo claro es la Ley 30/1994 del Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común, cuyo artículo relativo al acceso a los archivos fue redactado por personas que, amén de desconocer completamente lo que es un archivo, debían tener una especial inquina a normalizar los procedimientos de acceso, pues permiten el desarrollo de legislaciones especiales cuyas disposiciones son contradictorias entre sí. Dándose la paradoja que, gracias al curioso funcionamiento de nuestras transferencias, la documentación depositada en los archivos centrales no pueda consultarla un ciudadano, mientras que esa misma, pero más moderna, pueda ser libremente utilizada en uno histórico. Claro que tamaño dislate se acentúa por la proliferación de órdenes y resoluciones relacionadas con la documentación que subrogan o modifican las disposiciones de la Ley 16/1985. Y es que, cada vez, se hace más necesaria la promulgación de un reglamento que desarrolle la ley y

⁸ El sistema militar se rige por legislación propia, consecuencia de las especiales circunstancias que han concurrido en la historia política española. Claro que cada Arma, digamos que tiende a utilizar los archivos de manera muy particular. El ejército de Tierra tiende a desconcentrar su documentación en numerosos depósitos, aunque en el Servicio Histórico Militar suelen agruparse los documentos de acuerdo a su pretendido valor histórico o estético, siempre "mano a mano" con el Instituto de Historia Militar; y los archivos de Marina y Aire tienen una clara dependencia de los respectivos museos, a veces obsesionados con meter los papeles en las vitrinas.

⁹ Hoy en día es preciso añadir el de Medioambiente.

disponga, estipule y regule las pautas necesarias para apuntalar el sistema de archivos. Sólo de esta forma podrán refrenarse algunas de las actitudes de la Administración con respecto a éstos.¹⁰

Uno comienza a admirar al personal especializado en archivos que se encuentra destinado en los órganos ejecutivos de las Administraciones Públicas. Sujetos a una serie de servidumbres propias de los festejos conmemorativos, de la actuación cultural de prestigio y de las presiones externas en materia de cooperación cultural, intentan conciliar la realidad administrativa con el estado de nuestras instituciones. Siempre, tratando de convencer a “propios y extraños” que los documentos actuales también son Patrimonio Documental, que los antiguos surgieron por las mismas necesidades que los actuales y que si nuestros antepasados hubieran actuado como nosotros lo hacemos, en vez del Archivo de Simancas tendríamos un parador de turismo. La cara de extrañeza con que son observados y escrutados nos hace pensar que terminarán sus días recluidos en algún cotolengo.

LAS MENTALIDADES

Por mentalidades entendemos hábitos de la Administración Pública, actos conscientes o inconscientes, que, como el Guadiana, aparecen y desaparecen cuan dolencia crónica, afectando a la integridad y supervivencia de la documentación. Aunque existe una queja, habitual, sobre el gran volumen de producción de las administraciones, la frecuente eliminación incontrolada de patrimonio histórico documental nos debería obligar, si no a lanzar aullidos de dolor, sí al menos a plantearnos algunas reflexiones lastimeras sobre el tema.

Existen varios tipos de destrucciones. La primera, es consecuencia de las grandes y pequeñas catástrofes que han asolado nuestros archivos: guerras, incendios, plagas inundaciones,... Los ejemplos son numerosos y desde tiempos inmemoriales es extraño que algún archivo no haya sido atacado en mayor o menor grado por alguno de estos acontecimientos. Claro que no es lo mismo el reventón

¹⁰ La cuestión de la necesidad de un reglamento empieza a ser enfermiza. En cada reunión, congreso y conferencia profesional se insiste en su importancia como elemento básico para el funcionamiento del sistema. El proyecto elaborado por un grupo de destacados profesionales duerme el sueño de los justos por mor de una pretendida búsqueda de un consenso con las Autonomías y el resto de los organismos del Estado. Mientras, alguna de aquéllas no tienen empacho en promulgar los suyos, sin tener ningún reparo en “consensuarse” con el Ministerio. En el año 2000 se celebrará el Congreso Mundial de Archivos en Sevilla, en el que España deberá mostrar sus logros en materia archivística, y uno se pregunta si vamos a seguir insistiendo, como ejemplo de modernidad, en el Reglamento de 1901.

de una tubería que el bombardeo de un "stuka". Entre las grandes destrucciones fortuitas de la historia de los archivos podemos destacar el incendio de 1846, que afectó a los ministerios de Guerra, Marina y Gracia y Justicia o el del Archivo General del Reino de Alcalá de Henares en 1939, cuya desaparición supuso no sólo una pérdida irrecuperable para el Patrimonio Documental español sino que además "vició" durante treinta años el funcionamiento del Sistema Archivístico.

Lo que ante todo debemos tener presente es que la mayoría de las eliminaciones incontroladas de la documentación han sido fruto de las deficientes condiciones de instalación y manipulación que sufren los archivos, que ocupan, generalmente, sótanos y desvanes de las instituciones públicas. Aunque no siempre, puesto que la documentación y la información "van cogidas de la mano", y todos los poderes públicos tienden a ocultar alguna actuación política en virtud de, mejor o peor fundamentada, la "razón de Estado". Existe una trayectoria dentro de los archivos que nos indica que los sistemas democráticos prefieren destruir la información mientras que las dictaduras, simplemente, la ocultan. Este hecho es lógico por cuanto en un "estado de derecho" existen una serie de libertades plenamente reconocidas a los ciudadanos, que restringen las actividades de los poderes públicos.¹¹

Son conocidas, desde principios del siglo XX, las eliminaciones efectuadas por liberales y conservadores, o las destrucciones ejecutadas durante la Guerra Civil con objeto de ocultar algunos hechos o, por contra, para resaltar otros. Más cercanas son las eliminaciones que se produjeron en España durante la transición del Régimen autoritario a uno constitucional. Son conocidos los expurgos, más o menos incontrolados, que sufrieron los fondos documentales de los Gobiernos Civiles o los expedientes policiales del antiguo Ministerio de la Gobernación, intentando ocultar actuaciones represivas del Estado que no interesaba se mostraran a la luz pública. También resulta esclarecedor la desaparición de fondos de las Jefaturas Provinciales de la extinta Falange, tal vez en un intento de querer eliminar pasados comprometedores.

Pero si grave es la desaparición de documentos por motivos políticos, que es siempre coyuntural y no se sostiene sobre ninguna base legal, más incongruente resulta la eliminación legalizada de documentación pública. El concepto «legal» es preciso entenderlo entre comillas; se trata, en realidad, de destrucción de documentación que la falta de instalaciones e infraestructuras impide su conservación. Podemos señalar dos períodos claramente diferenciados: hasta 1969, la

¹¹ Sirvan como ejemplo las noticias sobre máquinas destructoras de papel en los hechos de reciente trasfondo político.

inexistencia de un archivo del Estado a donde se pudiera transferir la documentación, y la falta de una legislación coherente permitió que las instituciones públicas eliminaran documentación. Pero a partir de esa fecha, y con la construcción del Archivo General de la Administración, la eliminación sólo puede ser considerada desde el punto de vista del desconocimiento legal y de la ignorancia de las autoridades sobre la obligación de transferir a los archivos.

Eliminaciones tempranas en el tiempo son las planteadas por el Poder Judicial. En las sucesivas regulaciones que se ha dotado a este procedimiento de expurgo se ha tenido en cuenta la obligación de la intervención de un archivero; también se consideró la necesidad de su participación en el decreto que, tras la Guerra Civil, obligaba a las instituciones a entregar papel viejo ante la insuficiencia de la industria nacional. Sin embargo, el maximalismo habitual de la Administración en la toma de decisiones convirtió esta destrucción controlada en un puro acto de devastamiento indiscriminado, como lo demuestran los numerosos organismos públicos españoles que presentan importantes lagunas en sus fondos documentales, y no importa el nivel y categoría de sus actuaciones: Ministerios, Ayuntamientos o Diputaciones han hecho desaparecer un importante pedazo de nuestro Patrimonio Histórico.

Si graves fueron estas actuaciones, qué argumentar ante los disparates que se han realizado en España durante las décadas de los sesenta y setenta. Amparándose en una pretendida cobertura legal, algunas instituciones iniciaron un proceso de eliminación, justificado por la falta de espacio. Señalemos actitudes poco conocidas como las del INSALUD y la de Correos y Telégrafos, que ignorando la existencia de archivos públicos, alegremente dispusieron plazos de vigencia material -que no administrativa- de la documentación.¹² Esta especial actitud fue impregnando la mentalidad de legisladores y legislados, de tal forma que, en 1973, el Código de Comercio permitía a las empresas destruir la documentación de más de cinco años de antigüedad.

Esta mentalidad destructiva de la Administración es un reflejo del concepto que posee la sociedad sobre los documentos. Éstos se extraen de su contexto y se les cubre de un "halo de misterio", pues ocultan secretos inconfesables o son la llave que permite el descubrimiento de fabulosos tesoros. Es la influencia de la novela gótica o de la arqueología romántica que, incluso en nuestros días, impregna a los medios de comunicación. Es la eterna disputa entre lo antiguo y lo

¹² Circular de 19-octubre-1957 del Instituto Nacional de Previsión: Normas a que deberán atenerse las Delegaciones Provinciales para destruir o enajenar documentación caducada; y Orden de 26-junio-1972 sobre documentación de la Administración General de Correos y Telégrafos.

nuevo, lo valioso y lo inservible. Tan graves son las consecuencias de estas actitudes que debería prohibirse que tuvieran responsabilidades con los archivos cualquier persona que hubiera leído *Dioses, Tumbas y Sabios*.

Esta idea del tesoro documental que aparece en un ignoto escondite medieval, tras una pared u oculto en un compartimiento secreto, ha hecho prevalecer la textura del documento individualizado frente al conjunto de todos los documentos que forman nuestro patrimonio documental. Esta sacralización del pergamino, cubierto de caracteres extraños e ilegibles, ha motivado el desprecio social que existe sobre la documentación contemporánea, como si todos nuestros testimonios escritos hubieran nacido con la expresa intención de ser ocultados en un hoyo y que el archivero, en vez de controlar las transferencias, hubiera de ir con un pico y una azada por esos “montes de Dios” presto a descubrir viejos papeles olvidados.

Con el tiempo, y en una sociedad que aspira a crear cánones de belleza en todas las esferas de su actuación, ha surgido un diletante movimiento en el que hace prevalecer lo estético frente a la información que contienen los documentos. Sólo de esta manera se puede entender el gran predicamento que gozan entre ciudadanos e instituciones los mapas, planos y fotografías.

Sin embargo, no es del todo cierta la afirmación contenida en el párrafo anterior. No es un mero capricho estético la utilización del documento fuera de contexto, sino que existe un importante componente propagandístico en la proliferación de exposiciones por toda nuestra geografía. Esta mezcla de propaganda y cultureta visual ha ocasionado que en todos los organismos públicos, sea cual sea su adscripción administrativa, hayan aparecido las partidas presupuestarias para la cultura. Los archivos no podían escapar a estas tendencias, y entidades españolas de mayor o menor calado se han dedicado a acaparar documentos con objeto de construirse un pretendido prestigio cultural. Este sentido “provinciano” de poseer documentos de valor sólo incide en la dispersión de la información y su descontrol, pues el usuario, investigador o ciudadano de a pie, difícilmente encuentra lo que busca salvo que posea un acendrado olfato detectivesco o una increíble suerte. De hecho, en los archivos centrales de ministerios y organismos autónomos, lo que prima es el puro concepto histórico, el de la investigación, el de cultura de y para el prestigio de la entidad, olvidándose de su fin primordial: el de informar a la Administración y a los ciudadanos. Ningún profesional puede defender que en los archivos administrativos haya documentación más antigua que en los históricos y que su actividad principal sea atender a los investigadores.

Los archiveros no podemos rehuir nuestra propia responsabilidad fruto de nuestro escaso número, de nuestra preparación historicista y de nuestro deseo de sobrevivir en una Administración que nos soporta como un mal menor heredado de tiempos pasados. El ser un cuerpo reducido ha influido en la aparición de actuaciones endogámicas y en la creación de un ficticio sentimiento de alta consideración por nuestra capacidad, alejándonos de los auténticos fines y objetivos de la profesión. Tampoco ha ayudado nuestro origen académico, preferentemente entroncado con la historia medieval, ni el temario de oposiciones.

LAS TRANSFERENCIAS

Uno de los primeros síntomas de debilidad y deterioro del sistema archivístico es el mal funcionamiento de las transferencias de documentación. El ejemplo más visible es el colapso del Archivo Histórico Nacional. Edificio obsoleto en su misma concepción, se queda pequeño en el mismo momento de su inauguración. Hoy en día resulta imposible transferir documentación desde el Archivo General de la Administración, que pervirtiendo sus fines se ha convertido en el archivo para la Historia Contemporánea. La Administración se ha despreocupado del problema y ha preferido acometer obras faraónicas de discutible interés, antes de salvaguardar el Patrimonio Documental más rico del mundo. Se ha preferido elaborar grandes programas museísticos o hipotecar la política cultural española con algunas adquisiciones, antes de proteger y custodiar nuestra documentación en un edificio que pueda llamarse, de verdad, Archivo Histórico Nacional. El despego del Estado tal vez sea debido a la existencia de cinco archivos generales, caso único en el mundo, que todos juntos forman el gran Archivo Nacional. Sería preciso preguntarse si la riqueza documental va reñida con su cuidado y tutela.

Las transferencias siguen siendo reguladas por el Decreto de 8 de Mayo de 1969, por el que se crea y regula el funcionamiento del Archivo General de la Administración. Institución colosal, con más de 130 km. de documentación, sus dimensiones nos hacen pensar que en España los documentos son transferidos con regularidad y minuciosidad desde los archivos centrales. ¡Nada más lejos de la realidad! Los archivos administrativos conservan auténticos nidos de papeles históricos que se cuidan y miman como si fueran su única razón de existencia. Esta situación difícilmente puede explicarse “a la luz” de los conocimientos y objetivos de nuestra profesión; tenemos tan mala conciencia de lo que hacemos que nos inventamos excusas o nos justificamos con “frases hechas”. Vivimos en un mundo teórico (el cual choca frontalmente con nuestra existencia profesional), nos despreocupamos de los documentos depositados en las oficinas y defendemos con “uñas y dientes” cualquier papel con visos de poseer “pedigree”, una antigüedad

supuesta que a medida que avanzan las ciencias históricas es cada vez de una fecha más cercana. Si en el pasado custodiábamos vigilantes los documentos fechados en la Edad Media, en la actualidad guardamos en cajas fuertes los de la cercana Guerra Civil.

Algunas veces representamos auténticos sainetes cuando, enterados por la prensa, o por los compañeros, de la aparición en algunas instituciones privadas de documentos públicos, mostramos el gesto hosco y señalamos con el dedo acusador a los culpables de semejante latrocinio. Mientras, enviamos a los archivos intermedios los documentos producidos el año anterior y retenemos los más antiguos, argumentando que son utilizados en la actualidad para la gestión administrativa, aunque el documento “de marras” sea el contrato de compra de Babieca por el Cid Campeador.

LOS EXPOLIOS

Expoliar consiste en apropiarse de algo con violencia o iniquidad, pero más consistente es entenderlo como botín de guerra, pues a veces esa es la idea que podemos sacar de las relaciones entre las distintas administraciones o de actuaciones particulares. La “balcanización” de nuestro sistema ha dado lugar a guerras intestinas para apropiarse de la documentación: cual “servios, bosnios y croatas” los poderes públicos y las entidades privadas han entrado en una dinámica encaminada a la obtención de documentos, en una mal entendida política de prestigio cultural, soslayando los principios y fundamentos jurídicos y confundiendo los objetivos del Sistema.

La dispersión de las fuentes documentales en innumerables depósitos pertenecientes a instituciones distintas ha ocasionado que los ciudadanos ignoren a dónde deben dirigirse, pero este hecho se agrava por cuanto los profesionales tampoco son capaces de discernir en dónde se ocultan semejantes tesoros. Es cierto que el Censo de Archivos es un instrumento que puede paliar estos inconvenientes, pero no nos engañemos, la mezcla entre las deficiencias propias de la archivística y la escasez de medios con que constan los archivos impide, en numerosas ocasiones, interpretar los datos existentes, sin que podamos ignorar que, en ciertos casos, ni siquiera hay constancia de los mismos.

Las rapiñas institucionales son las que más han afectado al Sistema de Archivos. Son las Comunidades Autónomas las que por activa y por pasiva han iniciado una auténtica carrera por adquirir Patrimonio Documental a costa del resto de sus congéneres, en especial de la Administración. Existe una auténtica

confusión, consciente o no, entre los principios competenciales y los territoriales; para algunas autoridades autonómicas, la existencia de su propia política archivística pasa por la apropiación de los títulos de propiedad que legítimamente le corresponden a la nación española, en un claro intento de conseguir una legitimidad propia, distinta y diferente. Ese intento nacionalista, regionalista o local ultramontano ha puesto en peligro los propios fundamentos de los archivos, por cuanto se persigue su desgajamiento en virtud de principios geográficos excluyentes. La política de transferencias del Estado en materia de archivos ha contribuido a esta situación, claramente manifestada en las legislaciones autonómicas que se subrogan la tutela de los archivos confundiendo propiedad con gestión.¹³

Claro que resulta fácil “demonizar” a las Administraciones Autonómicas, y no observar que el enemigo se encuentra entre nosotros. Un mal entendido concepto patrimonial de la documentación y un desmedido afán de protagonismo cultural se ha extendido entre los organismos públicos del Estado. La creación de Centros de Documentación del Patrimonio o de Institutos de Investigación dentro de las estructuras ministeriales, permiten a sus titulares hacer acopio de documentos vitales para el conocimiento y difusión de sus funciones. Las motivaciones con las que fundamentan su existencia “harían las delicias” de cualquier administrativista.¹⁴

La idea patrimonial de los políticos sobre la documentación generada en el ejercicio de sus cargos tampoco ayuda a fortalecer el sistema. Desde el Antiguo Régimen, los cargos públicos han sido objeto de adscripción a familias y linajes, a través de su inclusión en los mayorazgos. Aunque la llegada del Estado Liberal debía haber terminado con estas prácticas, la realidad es algo estremecedora, puesto que no se encuentran alejados de la verdad los investigadores que afirman que el estudio de la historia española debe efectuarse en los archivos privados. Pruebas concluyentes de esta situación las podemos hallar con solo “dar un vistazo” a nuestro alrededor: fundaciones creadas a imagen y semejanza de las anglosajonas, sólo que sin el control a las que éstas son obligadas; museos y bibliotecas privadas o públicas en donde se depositan documentos de destacados personajes públicos;

¹³ Estas líneas se escribieron antes de que se iniciara la polémica sobre los documentos de Salamanca. No se trató de una profecía; era evidente que tarde o temprano alguna contienda llegaría a la prensa. Los antecedentes existentes no prometían nada bueno, y los protocolos notariales son el ejemplo más destacado: en estos últimos años Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos se han dedicado a repartirlos de acuerdo a sus intereses. También la documentación de la Administración Periférica del Estado ha sido adquirida por las Comunidades para depositarla en sus Archivos Generales, entre otras destacan la Andaluza, la Catalana y la Madrileña.

¹⁴ Un último ejemplo, el Centro de Documentación sobre Prisiones, creado por el Ministerio de Justicia e Interior.

obras de Historia Contemporánea, elaboradas por investigadores de prestigio con fuentes documentales públicas halladas en domicilios particulares.

La proliferación de gabinetes y consejeros de ministros y subsecretarios, el concepto "partidista" de la política frente al procedimental de la Administración, y la indefinición existente entre los límites del Gobierno y de la Administración tampoco ayudan a evitar el lento goteo del expolio documental.

LOS OBJETIVOS DE LA PROFESIÓN

Tampoco la propia archivística puede quedar al margen del dislate que supone la ruptura del Sistema español de Archivos. La indefinición de la metodología archivística, nuestra propia confusión, fruto de la heterogeneidad de nuestras manifestaciones, nuestras continuas "discusiones bizantinas" sobre los términos básicos de nuestra profesión y nuestra actitud insolidaria "de los unos respecto a los otros", incurriendo en el rechazo absoluto de los méritos y conocimientos de los demás, han socavado nuestra voz y nuestra profesión ante las amenazas existentes.

Salvo raras excepciones, la archivística se encuentra en una fase netamente teórica. Faltan trabajos prácticos que desarrollen nuestros fundamentos y principios, una muestra clara y explicativa de cuáles son los caminos a tomar, los obstáculos existentes y las vías que hay que rechazar. ¿Nos hemos vuelto tan ortodoxos, tan "chiftas" de los valores archivísticos, que nos sentimos incapaces de sacar a la luz nuestros trabajos? ¿Acaso este miedo está tan acendrado ante la posible crítica, que nos hemos acostumbrado a vivir en una actitud de molicie regodeándonos de nuestra propia valía, y viviendo a costa de los trabajos de nuestros antecesores? Son preguntas a las que debemos responder con resultados, debemos aprovechar estos años de revolución de los conceptos, de nuevas y viejas inquietudes que no deben caer en "saco roto".

Sin duda, la valoración, por nosotros mismos, de cuáles han de ser las características que deben definir nuestra profesión es sintomática de las diferencias que nos separan. Tradicionalmente, el archivero decimonónico mantenía una posición de investigador y erudito, de nexo mediático entre la información y su análisis. En una sociedad que iniciaba sus primeros pasos en el campo de la instrucción general, con las universidades restringidas a unos pocos núcleos urbanos, con escasas personas que pudieran ejercer el papel de intelectuales, no resulta extraño que muchos archiveros ocuparan el papel que hoy en día realizan catedráticos y profesores universitarios. Por ello, ¿puede resultarnos extraño que existiera un trasvase de personas entre los archivos y las facultades de letras?;

¿acaso nos debemos asombrar por que la mayor parte de los trabajos “de prestigio” escritos por los archiveros fueran dirigidos a la pura investigación histórica?¹⁵

Este concepto de archivero, o mejor la añoranza por un pasado lleno de satisfacciones personales, aparece como un sentimiento de frustración por la pérdida del paraíso que se encuentra en los Departamentos Universitarios. Los nuevos condicionamientos de la sociedad y la estructura cerrada y rígida de las Universidades españolas impiden la vuelta a los “viejos tiempos”. Y estos sentimientos dan lugar a frases hechas como: “recuperar el pasado glorioso”, “volver a aquellas épocas en que ser archivero suponía obtener el reconocimiento de la sociedad” o “es intolerable la comparación entre nuestros actuales sueldos y la importancia de nuestra misión”.

Precisamente, en el significado de cuál es nuestra misión se encuentra uno de los principales inconvenientes para que podamos desarrollar una visión clara y objetiva de nuestros trabajos. La mayoría de los archiveros son funcionarios públicos, sujetos a una especial regulación y enmarcados en una estructura administrativa específica. Parece extraño que esta Administración nos sostenga y alimente para que nos dediquemos a investigar o nos deleitemos en la investigación puramente histórica. Tampoco semeja muy ético que, mientras un usuario de un archivo está sujeto a numerosos controles, podamos dedicarnos a revolver los papeles sin ninguna cortapisa elaborando trabajos de alta erudición que no repercuten, directamente, en beneficio de nuestros clientes. No confundamos la investigación archivística con la meramente histórica; el objetivo de nuestros empeños debe centrarse en la organización de los fondos documentales, en la normalización de la información contenida en los documentos, en su recuperación coherente y lógica, mirando siempre el interés general de aquellos a quienes debemos servir. ¡Justo a las personas que, con tanto anhelo, ansiamos identificarnos!

Se nos llena la boca hablando de Ciencia Archivística, como si repitiéndolo continuamente nuestros deseos acabarán transformándose en realidad. ¿Cómo osamos insistir en nuestra calidad de científicos, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas y apelamos a la objeción de conciencia archivística o a la pura insumisión ante órdenes o cambios que ni entendemos o queremos entender? Cual cainítas nos “abalanzamos a la yugular” de nuestros camaradas de

¹⁵ Para corroborar estas afirmaciones basta un simple vistazo al *Catálogo Bio-bibliográfico del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 1858-1958*, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid 1958. Realizado para conmemorar el centenario de la fundación del Cuerpo de Archiveros del Estado, la mayor parte de los trabajos que se recogen tienen poco que ver con el concepto actual de la archivística, sino con la Historia en todos sus aspectos.

profesión, negándoles “el pan y la sal”, ridiculizándoles o ignorándoles... Incapaces de entablar un diálogo intelectual sosegado y rico, nos “arrojamos a la arena” de la contienda destrozando en breves segundos los trabajos de nuestros semejantes, aunque éstos sean fruto de años de discusión y especialización. Cual profetas del Antiguo Testamento, insistimos en que poseemos la verdad absoluta, directamente revelada por alguna deidad desconocida, mientras que los demás, al no reconocerla, o bien son unos herejes o, lo más seguro, unos auténticos paganos. Si no consideramos a los demás aptos para ejercer la profesión ¿por qué vamos a obtener el reconocimiento de la sociedad?; si nos enfrentamos sobre el papel que tenemos en la Administración ¿cómo ésta nos va a recompensar?

¿Hasta cuándo vamos a poder mantener esta situación? ¿Cuánto tiempo se necesita para que seamos sustituidos por otras profesiones?. Vemos con desprecio cómo los documentalistas se permiten escribir sobre archivística, cómo publican libros y artículos que, con la ladina afirmación de integrarnos en las Ciencias de la Información, lo que están haciendo es mezclarnos en un “totum revolutum”. Pero poseen la fuerza de la Universidad, no dudan en utilizar a “machamartillo” las tecnologías, lo que les da cierto aire de modernidad, y se aprovechan de nuestra debilidad metodológica.¹⁶

Nuestra falta de una única metodología, de hecho, se observa en todos y cada uno de los campos de nuestra actividad: carecemos de un lenguaje común; ni siquiera en cuestiones relacionadas con la terminología nos entendemos.¹⁷ Pero los mayores problemas se hallan en la normalización del tratamiento archivístico de los fondos documentales: la identificación, valoración y descripción de los mismos. La visión de los archivos como conjunto de colecciones; la misma institución productora reflejada de manera diferente en uno u otro centro; las diferentes aplicaciones del principio de procedencia, la falta de una programación descriptiva general en todas partes y la escasa difusión de los instrumentos, son cuestiones que debemos tratar cuanto antes. Ni siquiera instrumentos descriptivos como las guías o los censos, que no deberían ser objeto de excesivas discusiones,

¹⁶ Sin entrar en nombres y obras concretas, una visión al actual panorama editorial o a los programas de algunas Universidades nos demuestra que la archivística es tratada por profesionales de muy distinta índole: documentalistas, periodistas, paleógrafos, bibliotecarios... incluyendo auténticos archiveros. En realidad nos encontramos con un intento de consolidar, desarrollar o evolucionar determinadas áreas, que necesitan ampliar su campo de acción ante la disminución de la demanda de sus propias disciplinas universitarias.

¹⁷ En 1993, la Subdirección General de los Archivos Estatales publicó el *Diccionario de Terminología Archivística*, que ya va por su 2ª edición. Una obra que debería ser de obligado uso en todos y cada uno de los archivos de titularidad estatal es mejor aceptada en el exterior que a quien va realmente dirigida.

se escapan de esta falta de normalización de la información contenida en sus registros, disminuyendo su utilidad e interés. La automatización de la información, la puesta en red de los archivos, son apuestas de futuro que exigen el incremento de nuestra capacidad de servicio, sin olvidar nuestra gran asignatura pendiente, en favor del Sistema: la valoración y eliminación controlada de las series documentales.

EPÍLOGO

En medio de esta situación, que parece una auténtica hecatombe, se alzan numerosos intentos individuales y colectivos que nos hacen alimentar algunas esperanzas. Creemos, siempre que nos olvidemos de las leyes de Murphy, que el Sistema Español de Archivos puede consolidarse o, al menos, mejorar de sus aparentes dolencias. De nosotros, los profesionales, debe esperarse un sobre esfuerzo que nos permita acabar con concepciones obtusas y mentalidades trasnochadas, que nuestra claridad de ideas influya en las decisiones de los órganos ejecutivos y, ante todo, que podamos asegurar con convicción que la archivística es una ciencia o, por lo menos, una técnica común.

Es necesario que los archiveros tomemos conciencia de nuestro origen, de nuestros objetivos y fines y de nuestro lugar en la sociedad. La mayor parte de nosotros somos autodidactas o fuimos enseñados dentro de un discipulaje reducido a la mínima expresión; esta falta de enseñanza única y reglada ha dado lugar a multitud de "tribus", casi tantas como archiveros.¹⁸ Tampoco debemos olvidar que la sociedad ha evolucionado y, también, han cambiado los requisitos exigidos para servir a instituciones y ciudadanos. La especialización del mundo actual exige nuevos conocimientos, pero no al coste de rechazar todo lo anterior, como si la experiencia del pasado fuera inútil o despreciable. Recojamos lo mejor de todas las esferas y ámbitos, involucremos a todos en un proceso de regeneración y trabajemos en equipo. Desechemos los conceptos anacrónicos sobre la excepcionalidad de nuestros archivos, convirtámonos en informantes del contenido de nuestros fondos documentales, con toda la carga intelectual y cultural que ello supone, difundámoslos entre todos los ciudadanos y conservemos lo que sea estrictamente preciso de custodiar para deleite de nuestros herederos.

¹⁸ La falta de una enseñanza normalizada en las Universidades, con un programa completo y extenso, es paliada por los numerosos cursos, conferencias y publicaciones existentes y, sobre todo, por la aparición de las Escuelas-Taller de Archivos organizadas por el Ministerio de Cultura y el INEM. En un mundo profesional escaso de efectivos, la llegada al mundo del trabajo de varios centenares de profesionales, con una enseñanza teórica y práctica común, es un verdadero alivio.

Discutamos nuestros puntos de vista, pero démonos prisa en hallar soluciones y en arreglar diferencias. Comencemos a ceder, olvidémonos de actitudes de "prima donna" o de "acatar pero no obedecer". Tal vez podamos hacer realidad el viejo sueño de Tomás Moro y convertir la utopía en realidad.

RESUMEN

Teóricamente, el Sistema Español de Archivos es una estructura perfecta, plenamente aceptada por los profesionales y por la Administración. En realidad, se encuentra sujeto a ciertas desviaciones que impiden su normal desarrollo e impiden su eficacia. El concepto que tienen de los archivos los órganos ejecutivos culturales, la legislación que les afecta, la mentalidad que sobre los documentos posee nuestra sociedad y nuestros dirigentes, el colapso de las transferencias, las continuas apropiaciones de Patrimonio Histórico por las distintas Administraciones Públicas y la indefinición sobre la misión actual de los archivistas, son los factores que distorsionan el Sistema y que sólo podrán desaparecer cuando los archivistas españoles sean capaces de solucionar sus diferencias metodológicas.

RÉSUMÉ

En théorie, le système espagnol des archives est une structure parfaite, pleinement acceptée par les professionnels et l'administration. En réalité, il est confronté à certaines déviations qui interdisent son fonctionnement normal, et entravent son efficacité. Le concept qu'ont des archives les organes exécutifs culturels, la législation applicable, le regard de notre société et de nos dirigeants, l'absence de transfert, les continuelles appropriations du patrimoine historique par les diverses administrations publiques, le manque de définition dans la mission actuelle des archivistes, sont des facteurs qui nuisent au système, et disparaîtront quand les archivistes espagnols seront capables de solutionner leurs différences méthodologiques.

SUMMARY

The Spanish National Archives were born as a theoretically flawless institution. In practice, several factors alter its daily working and inhibit normality. This paper suggests that the main flaws are ambiguous cultural policies; the by-laws governing the System; a general disregard for documents and their preservation; the huge size of the Spanish historical heritage and the last but not the least, a severe indefiniteness of the role of that institution and of the people working on it.